

Las sendas abiertas en América Latina: aprendizajes y desafíos para una nueva agenda de transformaciones / Daniel Filmus... [et al.] ; compilado por Lucila Rosso; Daniel Filmus. - 1a ed.- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2019.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-722-540-2

1. América Latina. 2. Gobierno. 3. Integración Regional. I. Filmus, Daniel, comp. II. Rosso, Lucila, comp.

CDD 301.098

Edición: María Fernanda Pampín

Arte de tapa: Villy

Diseño y diagramación: Eleonora Silva

¿Qué miraba y qué está mirando el Tío Sam?

Las relaciones de la región con Estados Unidos

Leandro Morgenfeld

Introducción

En la primera parte del siglo XIX, tras casi una década de guerras de independencia en Hispanoamérica, y luego de haberse mantenido prescindente, el gobierno de Estados Unidos decidió que había llegado la hora de horadar la vieja hegemonía europea en el continente. El 2 de diciembre de 1823, el presidente James Monroe planteó en el Congreso la doctrina que llevaría su nombre y cuyo lema era *America for the Americans*. Traducido, en su uso habitual, significaba que América era para los norteamericanos. O sea, que no permitirían avances de potencias extra-continetales en lo que ellos denominaban el Hemisferio Occidental. En su famoso mensaje, Monroe declaró que considerarían cualquier intento europeo de extender su sistema político al continente americano como peligroso para la paz y la seguridad de Washington. La *doctrina Monroe* era una de las manifestaciones del nuevo expansionismo que Estados Unidos desplegaría en América en las décadas siguientes, construyendo un área de

influencia propia, bajo su estricto control. Durante casi doscientos años, fue reactualizada y reinterpretada en diversas ocasiones.

“La doctrina Monroe ha terminado”, sostuvo el último secretario de Estado de Barack Obama, John Kerry, el 18 de noviembre de 2013, ante embajadores del continente en la sede de la OEA, y agregó “la relación que buscamos [...] no es una declaración de Estados Unidos de cuándo y cómo intervendrá en los asuntos de Estados americanos, es sobre todos los Estados viéndonos como iguales, compartiendo responsabilidad y cooperando en asuntos de seguridad”. Ese discurso se inscribía en la estrategia que ensayó Obama en la *Cumbre de las Américas* de Trinidad y Tobago (2009) –“buscamos una relación entre iguales con los países de la región”– y procuraba también morigerar los efectos negativos que tuvieron las declaraciones de Kerry del 17 de abril de 2013, ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, cuando se refirió ofensivamente a la región como el *patio trasero* estadounidense, y el espionaje masivo de su gobierno contra líderes regionales como Evo Morales y Dilma Rousseff. Frente a una América Latina que avanzaba –aunque con dificultades– en la construcción de una integración alternativa, impulsando nuevas instituciones como la UNASUR y la CELAC, y frente a la creciente presencia de diversos actores extra-hemisféricos, Washington intentaba reposicionarse en una región históricamente estratégica para su proyección imperial.

En la campaña electoral de 2016 reapareció con fuerza un discurso xenófobo y racista, encarnado en el magnate Donald Trump, quien escaló en las encuestas denigrando a los inmigrantes hispanos. Cuando lanzó su candidatura, en junio de 2015, eligió poner a los mexicanos como blanco de sus ataques: “Están enviando gente que tiene muchos problemas, nos están enviando sus problemas, traen drogas, son violadores, y algunos supongo que serán buena gente, pero yo hablo con agentes de la frontera y me cuentan lo que hay”.

La estigmatización de los hispanos y de otros inmigrantes no fue solo una (exitosa) estrategia de campaña, sino que se tradujo en la concreción de una serie de iniciativas retrógradas: cinco días

después de asumir, Trump firmó una orden ejecutiva para avanzar en la construcción del muro con México, reforzó las guardias fronterizas, amenazó con acelerar y endurecer las deportaciones de los más de once millones de indocumentados –ya no solo ocupándose de aquellos con procesos criminales– instrumentó sanciones contra las ciudades «santuario» y firmó dos decretos para prohibir el ingreso de ciudadanos de algunos países con mayoría musulmana. Esto fue acompañado de una persistente retórica humillante contra los hispanos, de haber dado de baja el sitio *web* en español de la Casa Blanca y de criticar la supuesta permisividad en materia migratoria de algunos gobiernos europeos, que incluyó desde críticas a la “catastrófica política migratoria” de Angela Merkel hasta cuestionamientos vía Twitter al alcalde de Londres, Sadiq Khan, luego de un atentado terrorista.

El señalamiento de la inmigración como un *peligro* y un *flagelo* que amenaza a la sociedad es un emergente de la ofensiva ideológica neoconservadora estadounidense, en sintonía con lo que viene ocurriendo en Europa. Para el capital es útil disponer de un mercado de trabajo fragmentado, segmentado y competitivo, lo cual dificulta la organización unificada de la fuerza de trabajo. A través de ese discurso, se alienta la competencia entre trabajadores (legales o ilegales, nacionales o extranjeros) para dificultar la solidaridad y la consolidación de una conciencia de clase. El objetivo es desplazar las tensiones y contradicciones *verticales*, entre clases sociales, hacia conflictos *horizontales*, ya sea étnicos, raciales o nacionales. Abordar el tema migratorio, en Estados Unidos, exige analizar las contradicciones fundamentales de un sistema cuyo objetivo es el lucro, y no el bienestar y el enriquecimiento colectivos, a través del intercambio y la convivencia de una sociedad diversa.

Además de profundizar y acelerar la política de deportaciones masivas que ya implementaron Bush y Obama –cinco millones de indocumentados expulsados en los últimos dieciséis años– Trump pretende terminar con un programa clave de su antecesor DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), que otorga permisos

temporales a quienes ingresaron a Estados Unidos siendo niños o niñas.

Más allá de su desdén hacia los hispanos y las agresivas declaraciones contra Cuba y Venezuela, en sus primeros doce meses en la Casa Blanca, Donald Trump no había precisado su política hacia América Latina y el Caribe. Con su discurso en Texas, el 1° de febrero de 2018, antes de su primera gira por la región, el entonces secretario de Estado Rex Tillerson propuso una reafirmación de la Doctrina Monroe. En forma cínica, se refirió a las actitudes imperiales de China y Rusia, retomó la anacrónica retórica paternalista –que supone que Estados Unidos debe ensañarnos a construir sistemas políticos democráticos– y procuró comprometer a los gobiernos derechistas en su ataque contra los países bolivarianos: “América Latina no necesita nuevas potencias imperiales que solo pretenden beneficiar a sí mismos. El modelo de desarrollo con dirección estatal de China es un resabio del pasado. No tiene que ser el futuro de este hemisferio. La presencia cada vez mayor de Rusia en la región también es alarmante, pues sigue vendiendo armas y equipos militares a regímenes hostiles que no comparten ni respetan valores democráticos”. Tras su extenso discurso, en una sesión de preguntas con académicos de esa universidad, reivindicó la doctrina que Kerry había dado por muerta hace cinco años: “En ocasiones nos hemos olvidado de la doctrina Monroe y de lo que significó para el Hemisferio. Es tan relevante hoy como lo fue entonces”.

El anacrónico discurso de Tillerson, con un claro sesgo injerencista, puede tener acogida en los gobiernos derechistas, que tienen afinidad ideológica con ese discurso más propio de la Guerra Fría y que permanentemente esgrimen el modelo político y económico estadounidense como el que hay que imitar, pero no entre los pueblos, que rechazan la prédica y prácticas xenófobas y anti-hispanas del nuevo presidente estadounidense. Reafirma una *tradición* secular, pero a la vez le imprime un tono y un estilo que genera urticantes polémicas. Por ejemplo, cuando en una reunión con legisladores en la que discutía la reforma migratoria, el 11 de enero de 2018, Trump se

refirió a El Salvador y Haití, además de otros países africanos, como “países de mierda”, lo cual produjo una crisis diplomática y quejas de múltiples políticos dentro y fuera de Estados Unidos.

En los meses siguientes, Trump debía tener su debut en la región, pero volvió a imponerse lo imprevisto. Debía asistir a la Cumbre de las Américas (Lima, 13 y 14 de abril), pero solo tres días antes del inicio de la misma canceló su participación. Al mismo tiempo que en la capital peruana se realizaba la gala de recepción de los mandatarios participantes, Trump convocó una conferencia de prensa en la que anunció que estaba bombardeando en ese momento Damasco, la capital siria. Su primer viaje a Nuestra América, entonces, fue para participar en la Cumbre Presidencial del G20 (Buenos Aires, 30 de noviembre y 1° de diciembre de 2018). Más allá del alineamiento del gobierno anfitrión, encabezado por Mauricio Macri, debió enfrentar en la capital argentina distintas protestas populares –incluida una masiva movilización hacia el Congreso Nacional-, confirmando por qué genera tanto rechazo en la región.

El objetivo de este artículo será analizar las iniciativas de Trump hacia América Latina y el Caribe, sobre todo en los primeros dos años de su mandato, para entender cuáles son las oportunidades, amenazas y desafíos que supone para la región la Administración republicana. Se intentarán abordar las relaciones con Estados Unidos a partir de los distintos caminos y alternativas que se le ofrecen a Nuestra América en esta particular coyuntura, en la que el Departamento de Estado propone una nueva reactualización de la Doctrina Monroe, apoyando a gobiernos derechistas que, sin embargo, no logran imponer una “hegemonía robusta” funcional a Washington, tal como parece vislumbrarse luego de las elecciones primarias realizadas el 11 de agosto del presente en Argentina.

México, Venezuela y Cuba: tres países en la mira de Trump

Para analizar la política de Trump hacia América Latina y el Caribe tenemos que observar, muy en especial, tres países que fueron blanco de sus ataques desde su llegada a la Casa Blanca: México, Venezuela y Cuba. Trump utiliza a los hispanos como chivo expiatorio y los humilla para acumular poder político en el frente interno. México es el gran perjudicado, desde el punto de vista económico, político e ideológico. La nueva Administración también intenta revertir la distensión con Cuba iniciada hace algunos años por Obama y ataca abiertamente al gobierno venezolano.

México, como consecuencia de haber firmado el Tratado de Libre Comercio de América del norte (TLCAN –o NAFTA, por sus siglas en inglés–) hace casi un cuarto de siglo, es en términos económicos más dependiente que nunca de Estados Unidos. Se ve afectado por razones comerciales, por la presión de Trump para repatriar inversiones estadounidenses en las maquilas mexicanas, por el endurecimiento de los controles fronterizos y por las amenazas de cobrar impuestos a las remesas que millones de mexicanos envían de manera periódica a sus familias. Además, de acelerarse las deportaciones, esta afluencia poblacional generaría una presión extra para el mercado laboral, aumentando potencialmente la tasa de desocupación. Producto de esas agresiones, y en medio de una profunda crisis interna, México se debate sobre su futuro.

Cuando hace más de una década y media argumentábamos por qué había que rechazar el ALCA, poníamos como ejemplo lo perjudicial que estaba siendo el TLCAN para la economía mexicana. A partir de la firma de ese acuerdo, México disminuyó las tarifas arancelarias con Estados Unidos y Canadá (lo hizo, además, con otros países con los que también estableció acuerdos comerciales), en detrimento del resto de los países, que debían enfrentarse a las tarifas de la *nación más favorecida*.

En términos generales, puede concluirse que, si bien la apertura comercial, la privatización y la desregulación en México favorecieron a parte de su sector exportador, se produjo la desaparición de muchas cadenas productivas, se entregó el sistema bancario y financiero a los inversores extranjeros (pasaron a controlar el 90% del mismo), en las maquiladoras aumentó significativamente el componente importado, se produjo el colapso del campo frente a la “invasión” de productos agrícolas estadounidenses y se incrementó fuertemente el trabajo informal y “flexibilizado”, la miseria y la pobreza, entre otros motivos, por la quiebra de casi 30.000 pequeñas y medianas empresas y la desestructuración de la pequeña producción agrícola. El TLCAN significó, para México, profundizar e institucionalizar las políticas económicas impulsadas por el llamado Consenso de Washington y un obstáculo para acercarlo a Latinoamérica y alejarlo de su poderoso vecino del norte. Hoy el 80% de las exportaciones se dirigen hacia Estados Unidos –por eso impactó tan negativamente el triunfo de Trump en la economía y en la moneda– más de 5 millones de campesinos debieron abandonar la actividad agrícola –muchos de ellos son los inmigrantes indocumentados que Trump promete deportar– México importa maíz de Estados Unidos, aumentó la pobreza a más del 55%, no hubo una equiparación salarial con México y Estados Unidos –pese a las promesas, la brecha se ahondó– y el país vive, además, una catástrofe social, con decenas de miles de muertos, producto de un espiral de violencia descontrolada, asesinatos a periodistas y dirigentes políticos y una militarización de la vida cotidiana sin precedentes –se estima que hubo más de 200.000 muertes violentas, desde que Felipe Calderón inició la “guerra contra el narco” en 2006–.

Ante las amenazas de Trump de salir del TLCAN –producto del fuerte déficit comercial bilateral que le genera a Estados Unidos– o renegociarlo en términos aún más perjudiciales para México, algunos analistas, incluso en México, pretendieron maquillar ese acuerdo y mostrar que el país latinoamericano sacó provecho del mismo.

Pero no se puede soslayar las profundas consecuencias regresivas que tuvo ese TLC para las mayorías populares mexicanas.

La llegada de Trump a la Casa Blanca provocó un impacto en México, el país donde el magnate estadounidense tiene peor imagen. Peña Nieto, a través del entonces canciller Luis Videgaray, intentó un acercamiento humillante, que llevó al gobierno mexicano a niveles históricos de impopularidad en 2016. No casualmente Andrés Manuel López Obrador dio un batacazo en las elecciones presidenciales del 1° de julio de 2018, derrotando el bipartidismo del PRI y el PAN e iniciando un proceso de redireccionamiento de su inserción internacional y su política exterior, en función de ampliar los márgenes de maniobra. México parece empezar ahora a mirar más hacia el sur.

El discurso agresivo contra Venezuela por parte de Trump apareció ya en la campaña presidencial. Se refirió al gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura. Recibió en la Casa Blanca, antes que a ningún otro mandatario latinoamericano, a Lilian Tintori, la esposa del opositor Leopoldo López. Esa retórica injerencista fue acompañada de iniciativas concretas. Si ya Obama había tomado medidas extremas contra Venezuela –firmó una orden ejecutiva, el 9 de marzo de 2015, en la cual declaró a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional” estadounidense, ratificada nuevamente un año más tarde–, el nuevo mandatario las profundizó. Incluyó a Tarek el Aissami, vicepresidente de Nicolás Maduro, en la lista de perseguidos por sus supuestos vínculos con el narcotráfico. Este ataque diplomático fue respondido enérgicamente por el gobierno venezolano, quien acusó a Trump de continuar con las maniobras desestabilizadoras e injerencistas de Obama. Poco después, el jefe del Comando Sur, Kurt W. Tidd, compareció ante el Comité de Servicios Militares del Senado estadounidense, señalando que la inestabilidad en Venezuela afectaba a toda la región, repitiendo el latiguillo de que a través de ese país ejercían su influencia Rusia, Irán y China en América Latina. Sectores poderosos en Washington instan a la Casa Blanca y al Congreso estadounidense a realizar un *lobby* en

la OEA para sancionar a Venezuela aplicándole la Carta Democrática Interamericana.

Ante esta situación, que rememora la sufrida por Cuba en la Conferencia de Cancilleres Americanos de Punta del Este de enero de 1962, el gobierno del país caribeño optó por anunciar su salida de esa organización, caracterizada por el Che Guevara como un “ministerio de colonias” de Estados Unidos. En los meses siguientes se intentó generar una situación económica y social explosiva, para justificar una suerte de intervención regional humanitaria. La primera gira de Rex Tillerson por la región, en febrero de 2018, tuvo como objetivo central presionar a los gobiernos aliados –en particular al Grupo de Lima– para aislar a Venezuela, a cuyo gobierno se le retiró la invitación a participar en la VIII Cumbre de las Américas, con el aval o el pedido de Washington. Luego se incrementaron las presiones, reconociendo diplomáticamente en enero de este año a Juan Guaidó, autoproclamado presidente a cargo.

El caso de Cuba quizás es el más ilustrativo y elocuente de la política de Trump hacia la región. El viernes 16 de junio de 2017, desde Miami y en un acto que pareció más propio de la época de la Guerra Fría, el presidente estadounidense puso un freno en el proceso de deshielo con Cuba iniciado en 2014 por Obama. Rodeado de lo más rancio del anticastrismo, desplegó un agresivo discurso paternalista e injerencista. ¿Qué alcances y límites tiene el (nuevo) giro en la relación con la isla? ¿Cuáles son las causas del abandono de este “legado” de Obama? ¿Cuál fue la respuesta cubana? ¿Cómo va a impactar hacia adentro de Estados Unidos y en las ya de por sí complejas y tirantes relaciones con América Latina y el Caribe?

En primer lugar, vale la pena analizar el qué y el cómo del anuncio de la nueva política de Trump hacia Cuba. El acto realizado en Miami atrasó al menos un cuarto de siglo. El nuevo presidente estadounidense apeló a una retórica agresiva y más propia de la Guerra Fría. Rodeado de lo más retrógrado del exilio cubano, anunció el fin del acuerdo Obama-Castro y firmó el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre el Fortalecimiento de la Política de los Estados

Unidos hacia Cuba (Trump, 2017), con las nuevas directivas hacia la isla. En síntesis, los cambios que establece son los siguientes: restringe los viajes turísticos, complicando la obtención de permisos (en los primeros cinco meses del año, 250.000 estadounidenses viajaron a Cuba, lo mismo que en todo el 2016); reafirma el bloqueo económico, comercial y financiero que hace más de medio siglo intenta asfixiar a la isla; limita los viajes educativos con fines no académicos, que tendrán que ser grupales (prohíbe los viajes individuales auto-dirigidos) y limita las actividades económicas con empresas vinculadas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (básicamente, con el Grupo de Administración de Empresas –GAESA–). Sin embargo, no rompe las relaciones diplomáticas, ni cierra la embajada en La Habana –reabierto hace dos años– ni coloca de nuevo a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo, ni limita el envío de remesas, ni prohíbe los vínculos económicos con el sector cuentapropista de la isla, ni modifica los acuerdos migratorios, ni reinstala la política de “pies secos, pies mojados” –derogada por Obama el 12 de enero de 2017– que admitía a los cubanos que pisaran suelo estadounidense.

Más allá de que algunas de las medidas generaron complicaciones económicas en Cuba, lo más grave es el tono. El acto, de fuerte contenido simbólico, se realizó en la Pequeña Habana, en el Teatro Manuel Artime, justamente denominado así en honor del contrarrevolucionario que fuera el jefe civil de la Brigada 2056, aquella que invadiera la isla en Playa Girón, en abril de 1961 (“Es un honor estar en un teatro que lleva el nombre de un verdadero héroe del pueblo cubano [...] Estamos muy honrados de que nos acompañen los asombrosos veteranos de la Bahía de Cochinos”, dijo Trump). El presidente estadounidense habló luego del vice Mike Pence, el gobernador de La Florida Rick Scott, el senador de origen cubano y ex precandidato republicano Marco Rubio y el representante Mario Díaz-Balart (un día antes, este diputado había declarado: “Trump no está con los que reprimen al pueblo cubano como estaba Obama”). Calificó al sistema político isleño como una «dictadura» y desplegó un discurso agresivo, que se emparenta con su irrespetuoso mensaje de noviembre

pasado, cuando falleció Fidel Castro. Se refirió al gobierno de La Habana como el «brutal régimen castrista» y destacó que “haremos cumplir el embargo”. El acto fue la puesta en escena del retorno a la política agresiva que desplegaron sin éxito Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush, Clinton, Bush Jr. y Obama, al menos en su primer mandato.

*¿Por qué la vuelta a una retórica más propia de la Guerra Fría? ¿Por qué reivindicar el fracasado bloqueo, repudiado cada año en forma casi unánime en la ONU –en la última Asamblea General, ciento noventa y un países exigieron su levantamiento, y únicamente Estados Unidos e Israel se abstuvieron–? ¿Por qué insistir con una política que genera rechazo no sólo en la población estadounidense en general –según un sondeo de *The New York Times* de 2016, el 62% de la población estaba de acuerdo con el nuevo enfoque de Obama hacia Cuba– sino de los propios cubanoamericanos –el 70% de los cubanoamericanos de Miami apoyaban la normalización, mientras que el apoyo al bloqueo había caído a un 37%, en comparación con el 84% de 1990–? La principal causa del giro tiene que ver con la política interna de Estados Unidos. En primer lugar, es una “devolución de favores”. Trump, como ya mencionamos, modificó su anterior posición frente al deshielo para obtener el apoyo del establishment cubanoamericano, que le permitió ganar en La Florida, por un margen muy estrecho.*

Pero la escenificación del trato duro con Cuba también respondió en ese momento a sus necesidades políticas, en dos sentidos. Trump fue el presidente menos popular en sus primeros cien días, al menos desde que esto se mide en los años sesenta. Cosechaba altísimos niveles de rechazo, enfrenta movilizaciones de mujeres, trabajadores, estudiantes, investigadores, ecologistas, inmigrantes y pueblos originarios. Sufrió importantes reveses políticos (para imponer su veto migratorio, para aprobar el *TrumpCare*, para financiar el muro con México) y enfrentaba el llamado *RusiaGate*, que involucraba a importantes funcionarios de su entorno y amenazaba con obstaculizar o interrumpir su presidencia a través de un *impeachment*. Sin embargo, conserva el apoyo de sus votantes, aunque estos representaron

apenas el 27% del padrón. Ese es el sentido de este tipo de puestas en escena: reforzar su base política, atacando todo lo que sea considerado parte del “legado” de Obama (y, el deshielo con Cuba, sin dudas era un componente central del mismo). Exhibe una supuesta fortaleza hacia adentro, abroquela a sus seguidores ultraconservadores, y a la vez proyecta una imagen hacia afuera que refuerza su disposición a actuar de manera unilateral, sin tener en cuenta lo que opine la comunidad internacional: no le importa lo que diga la ONU sobre el bloqueo.

Claro que, cuando hablamos de cómo la política interna condiciona su política exterior, también nos referimos a cuestiones menos transparentes: Trump necesita el apoyo de su ex rival interno Marco Rubio, quien integra la Comisión de Inteligencia del Senado, que es la que investiga si Rusia intervino en las elecciones del año pasado en connivencia con el magante. Una semana antes de los anuncios sobre Cuba, ante esa comisión compareció James Comey, el ex jefe del FBI, expulsado por Trump pocos días antes. Rubio intercedió en el Senado para que Comey aclarara que Trump “no se encontraba personalmente bajo investigación”. La posición de este senador será clave para determinar el futuro de la investigación sobre la trama rusa. Como se ve, no solo en América Latina hay una estrecha relación entre política exterior y política interior, a pesar de lo que plantean los acríticos defensores de la «gran democracia» del Norte. En síntesis, el acto en Miami tuvo el triple objetivo de alejar la atención mediática del *affaire* Rusia, que había alcanzado su clímax por esos días, consolidar la base de apoyo republicana y devolver el favor electoral de los cubanoamericanos de Florida.

Esta agresividad registró un nuevo capítulo hacia fines de septiembre. Tras denunciar un supuesto “ataque sónico” contra diplomáticos estadounidenses apostados en La Habana, el 29 de septiembre la Administración Republicana resolvió reducir al mínimo la misión diplomática en la isla. Hizo volver a veintiún diplomáticos, congeló el otorgamiento de visas a cubanos y recomendó que sus ciudadanos no viajaran a Cuba. El 3 de octubre, además, resolvió

expulsar a quince diplomáticos cubanos que cumplían funciones en la embajada en Washington. El secretario de Estado, Rex Tillerson, quien aclaró que de todas formas no se rompían las relaciones diplomáticas, explicó: “La decisión se tomó por la incapacidad de Cuba de dar los pasos apropiados para proteger a nuestros diplomáticos de acuerdo con sus obligaciones bajo la Convención de Viena”.

Cedió así, una vez más, ante el poderoso senador Marco Rubio, quien aplaudió esta medida: “La embajada de los Estados Unidos en La Habana debería ser reducida a una sección de intereses y debemos estar preparados para considerar medidas adicionales contra el régimen de Castro si estos ataques continúan”.

La respuesta del gobierno cubano no se hizo esperar. En conferencia de prensa, ese mismo día en La Habana, el canciller Bruno Rodríguez declaró: “El gobierno de Estados Unidos, con estas acciones políticamente motivadas e irreflexivas, es el responsable del deterioro presente y probablemente futuro de las relaciones bilaterales”. Este nuevo incidente, instigado por el *lobby* cubanoamericano de Florida, es una muestra más de la hostilidad de la Casa Blanca con toda Nuestra América, y seguirá socavando la ya alicaída imagen de Trump en la región.

En los meses siguientes, Trump profundizó estas políticas, ampliando el bloqueo contra Cuba e incrementando la retórica anti-comunista, a través de dos halcones: el nuevo secretario de Estado, Mike Pompeo y el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, quien calificó a Venezuela, Cuba y Nicaragua como el nuevo “eje del mal” en el Hemisferio Occidental.

Los aliados de Trump, en problemas

Para atacar a los países no alineados, Trump busca subordinar a los gobiernos neoliberales que quedaron descolocados por su prédica proteccionista.

Los mandatarios de Argentina, México, Colombia y Brasil, que apostaban a la continuidad con Clinton y a la firma y extensión de acuerdos como el TLCAN y el Tratado de Asociación Transpacífica (TPP, por sus siglas en inglés), luego se vieron obligados a recalcular su inserción internacional. Se les dificultará seguir con la política de promoción del libre comercio, endeudamiento externo masivo y concesiones para atraer inversiones estadounidenses. El contexto mundial está siendo mucho más adverso. Cantan loas a la globalización neoliberal, cuando en Estados Unidos y Europa está siendo impugnada. En Argentina, por ejemplo, representantes del gobierno ya hablan de la necesidad de diversificar mercados y desplegar una política exterior menos enfocada en Washington y la Unión Europea, justo lo contrario a lo que hicieron desde que llegaron al poder.

El caso del gobierno argentino, el primero que “recuperó” la derecha regional, es sintomático. La política externa desplegada por Macri profundizó la inserción dependiente. Apenas es beneficiosa para una minoría concentrada: los bancos, los socios menores del gran capital trasnacional y los grandes exportadores, beneficiados por la baja de retenciones y por la mega-devaluación de diciembre de 2015. Sin embargo, hubo un análisis erróneo del contexto internacional. Se promovió una apertura comercial en función de avanzar con tratados de libre comercio, justo cuando las potencias occidentales avanzan en sentido contrario. Se pagó lo que exigían los *fondos buitres*, elevando enormemente el endeudamiento externo. Sigue cayendo la actividad, aumentan la pobreza y la desigualdad, la inflación no cede y la deuda externa se dispara.

Más allá de estas advertencias, el gobierno argentino buscó desesperadamente el contacto con Trump. Luego de intensas gestiones, el pasado 27 de abril, Macri por fin logró la foto en la Casa Blanca. ¿Por qué el magnate no le recriminó en público su explícito apoyo a Hillary Clinton en las recientes elecciones? Es simple: porque encuentra en el presidente argentino el delegado que necesita para reconstituir el poder de Estados Unidos en América Latina, una región que en los últimos años supo coordinar políticas no siempre subordinadas

a Washington. Más allá de la retórica ofensiva que desplegó en la campaña, el republicano precisa consolidar el dominio que históricamente su país ejerció en la región. Ante la debilidad política de los mandatarios de Brasil y México, Macri es el ideal: casi sin pedir nada a cambio, viene tomando acrítica y pasivamente los puntos de la agenda política, económica, militar e ideológica de Estados Unidos.

La frase que resume el encuentro es aquella que pronunció Trump ante los periodistas, antes de reunirse en el Salón Oval: “Él me va a hablar de limones, yo de Corea del Norte”. Humillante, sí, pero cierta. Y Macri no contestó nada. Es más, apenas pudo pronunciar una palabra ante los periodistas, ante la verbosidad del magnate. Pocos días después, se confirmaron las magras concesiones: los limones argentinos por fin podrían entrar al mercado estadounidense (tema negociado hace años y ya anunciado por Obama en diciembre) y habría cierta facilidad en el trámite migratorio para argentinos que viajen a hacer negocios a Estados Unidos. La contracara es la amenaza a las exportaciones de biodiesel argentino al país del norte. Los limones sumarían apenas cincuenta millones de dólares. Restricciones al biodiesel, en cambio, podrían generar pérdidas por unos 1.300 millones.

Pero eso no es lo más grave. Macri promete concesiones a los inversores, que van desde una menor regulación medioambiental, en el caso de la minería, a rebajas impositivas y del “costo laboral” (flexibilización mediante). O sea, peores condiciones para la mayoría de la población, además de una mayor extranjerización de la economía y una profundización del esquema extractivista. Desde el punto de vista político, Macri apuesta a la OEA, en detrimento de la UNASUR y la CELAC y ataca a los países no subordinados a Estados Unidos, como Venezuela, hoy el principal objetivo de las derechas regionales y el Departamento de Estado¹. Además, se incrementan la compra de armas y la injerencia de las fuerzas armadas estadounidenses.

¹ En ocasión de la visita de Obama, ambos gobiernos firmaron, el 23 de marzo, una declaración conjunta para hacer a la OEA “más relevante, eficiente, efectiva, financieramente sólida, y enfocada en lograr resultados que ayuden a asegurar una región más democrática, segura y próspera para todos sus habitantes”.

¿Qué más puede pedir Trump? Todo a cambio de una foto en la Casa Blanca, unas palmadas en la espalda, elogios y algunos limones. El problema es que ya se experimentó, en la Argentina, en la década de 1990, lo negativas que resultaron las “relaciones carnales” con Estados Unidos. Esta orientación, se profundizó durante la gira sudamericana del vice-presidente Mike Pence, quien visitó Colombia, Chile, Argentina y Panamá, entre el 13 y el 17 de agosto de 2017.

El 14 de agosto se produjo la llegada del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. El mandatario estadounidense llegó días después de la temeraria amenaza de Trump de una intervención militar en Venezuela. Tras el encuentro con Macri, en el que elogió la política económica que viene implementando, anunciaron un acuerdo para habilitar el todavía demorado ingreso de limones en Estados Unidos, pero a la vez para permitir la exportación de carne porcina hacia la Argentina, lo cual produjo quejas de los productores locales, que denunciaron el riesgo de perder hasta 35.000 puestos de trabajo.

Apenas una semana más tarde, el 22 de agosto, se conoció la decisión del Departamento de Comercio de Estados Unidos de cobrar aranceles prohibitivos (57% en promedio) a las importaciones de biodiesel provenientes de Argentina, ratificada en los primeros días de 2018. Esas ventas significaron en 2016 el 25% de las exportaciones al país del norte. Esta decisión produjo un cimbronazo en el gobierno argentino, quejas de múltiples productores y corporaciones agropecuarias y la muestra cabal del fracaso de la política de alineamiento, que hasta ahora no produjo ventajas económicas en el vínculo bilateral.

Esta decisión del Departamento de Comercio de aplicar elevados aranceles al biodiesel argentino, anunciada apenas una semana después de la visita del vicepresidente estadounidense, echa por tierra las expectativas de una mayor convergencia comercial bilateral. El gobierno argentino insiste en abrir la economía, pero no logra revertir el proteccionismo agrícola de Estados Unidos y Europa, con lo cual la balanza comercial arroja saldos negativos. El déficit comercial del 2017 fue récord. El 22 de diciembre se anunció el reingreso

de la Argentina al Sistema Generalizado de Preferencias –programa de rebaja limitada de aranceles a países “en desarrollo” del que había sido suspendido nuestro país en 2012 por los conflictos con empresas estadounidenses ante el CIADI– pero hay presiones para que Trump elimine directamente esos beneficios. La buena noticia fue opacada por la confirmación, el 4 de enero de 2018, de un arancel del 72% al biodiesel argentino por parte del Departamento de Comercio estadounidense, bloqueando exportaciones que proyectaban llegar a 1.500 millones de dólares este año. En marzo de 2018, además, hubo nuevas medidas proteccionistas contra el acero y aluminio –se fijó una cuota máxima para la Argentina– lo que afectó especialmente a las exportaciones argentinas, profundizando el déficit comercial bilateral en 2018. A su vez, el incremento de tasas por parte de la Reserva Federal provocó una mega-devaluación del peso argentino en abril y mayo y el anuncio del gobierno de la vuelta al Fondo Monetario Internacional, luego de doce años. La creciente dependencia financiera del gobierno argentino respecto al FMI no hizo sino incrementar el alineamiento de la Casa Rosada con el polémico magnate neoyorquino.

Unilateralismo y militarización de la política exterior hacia Nuestra América

El unilateralismo, injerencismo y militarismo de Trump son una amenaza creciente para Nuestra América. Ya repasamos los ataques contra México, Venezuela y Cuba. Pero no son los únicos. Un día antes del retrógrado acto en Miami, el 15 de junio, Mike Pence había disertado sobre las supuestas amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos provenientes de países centroamericanos como El Salvador, Honduras y Guatemala, a causa del narcotráfico y las pandillas. Pidió la colaboración de Sudamérica con Estados Unidos, en la lucha contra este flagelo. Este tipo de iniciativas son un avance más en la fracasada estrategia de la *guerra contra las drogas*, al igual que

la *lucha contra el terrorismo*, como excusas para aumentar el injerencismo militar –más bases, operaciones conjuntas, espionaje militar, venta de armamento–. El 3 de mayo, el todavía Secretario de Estado Rex Tillerson había anunciado a funcionarios de la cancillería de su país cuál sería la política hacia la región: “Lo que queremos hacer es lograr una nueva perspectiva (*step back*) y desarrollar una estrategia para el Hemisferio Occidental que piense América del Sur como un todo y sus relaciones con América Central, al igual que con Cuba y el Caribe. [...] Hay asuntos vinculados al financiamiento del terrorismo. Hay redes terroristas que han comenzado a emerger en partes de América del Sur que requieren nuestra atención. Hay asuntos de gobernabilidad en ciertos países –seguramente ustedes están siguiendo la situación en Venezuela; una real tragedia, pero estamos espezanzados que trabajando con otros [...] estaremos en posibilidades de ganar cierta influencia en Venezuela”.

Con Trump asistimos a una militarización de su política exterior y esto es particularmente preocupante en Nuestra América, que a pesar de ser una zona de paz, sufre esta avanzada de la diplomacia militar –más recursos para el *hard power*, en detrimento del *soft power*–. Hay, en ese sentido, una reversión parcial de la estrategia de dominación estadounidense que primó con Obama.

También aspira a recuperar el control del Canal de Panamá, fundamentalmente ante la “amenaza” que supone la construcción de otro canal bioceánico en Nicaragua, financiado con capitales chinos.

En el acto encabezado por Trump en Miami no solo se atacó a Cuba, sino también a Venezuela. El día anterior, Pence había declarado en ese mismo sentido: “Todos nosotros debemos elevar nuestras voces para condenar al gobierno venezolano por su abuso de poder y su abuso contra el propio pueblo, y hacerlo ya”. Ese mismo día el secretario de Estado, Rex Tillerson, había alertado, sin datos, sobre supuestas conexiones entre los carteles mexicanos de la droga y los fundamentalistas del Estado Islámico. John Kelly, el secretario de Seguridad Nacional –antes jefe del Comando Sur– también insistió en el supuesto vínculo entre “redes terroristas y redes criminales” como

los narcos. O sea, vale utilizar cualquier argumento –terrorismo, narcotráfico, pandillas– para justificar la militarización de la política de Estados Unidos hacia nuestra América.

Si Trump elige volver a ese tipo de iniciativas, crecerá aún más el rechazo que su figura provoca en la región por el muro en la frontera con México, su estigmatización de los hispanos y su política exterior unilateralista y militarista. Como señaló el presidente boliviano Evo Morales, en la apertura de la Conferencia Mundial de los Pueblos, realizada en Tiquipaya, Bolivia, ante representantes de 43 países: “Son los mismos que cierran las puertas y construyen muros para impedir que las personas que huyen de esas guerras militares o económicas salven sus existencias [...] Los muros entre pueblos son un atentado a la humanidad; no protegen, enfrentan; no unen, dividen [...] van en contra de la historia de la humanidad; mutilan la ciencia y el conocimiento; encienden el odio a la diferencia; ahogan la libertad”.

La derrota de Macri genera enormes esperanzas en Nuestra América

La derecha regional, subordinada acriticamente a la agenda y los intereses de Trump, hace tres años que insiste con el fin de la “marea rosa”, con el giro político conservador definitivo de la región, luego del ciclo abierto por las rebeliones populares de principios de siglo y el NO al ALCA en Mar del Plata (2005), que había habilitado una coordinación y cooperación política e integración regional inéditas en Nuestra América.

Sin embargo, esta lectura era sesgada, parcial, incompleta. Como dijo recientemente el analista internacional Juan Gabriel Tokatlian, a pesar del apoyo de Trump, los sectores más conservadores no lograron consolidar una “hegemonía robusta” en América Latina.

Es cierto que el triunfo electoral de Macri, en noviembre de 2015, fue el inicio de un vuelco a la derecha. Pocos días después la

oposición antichavista lograba un triunfo inusual en las elecciones legislativas en Venezuela, en febrero de 2016 Evo Morales perdía el referéndum para habilitar su reelección en Bolivia, Rafael Correa anunciaba que no iría por un nuevo mandato en Ecuador, se iniciaba el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff en Brasil y ganaba sorpresivamente el NO en el plebiscito sobre los acuerdos de paz con las FARC en Colombia.

Pero ese diagnóstico ignoraba otros procesos con resultados contrarios. Los halcones de Washington no lograron en Venezuela consolidar un golpe de Estado ni una intervención militar al mando del Pentágono y la CIA; en Colombia, si bien el uribista Iván Duque ganó las elecciones el año pasado, la novedad fue que Gustavo Petro logró un resultado inédito en el ballottage, con una opción de centroizquierda que superó el 40% y que lo deja bien posicionado para el futuro; y en México Andrés Manuel López Obrador quebró décadas de hegemonía del PRI y el PAN en una elección histórica que modificó la correlación de fuerzas regional.

Claro que la llegada al poder de Jair Bolsonaro implica una regresión brutal en Brasil y una subordinación a Estados Unidos que casi no registra antecedentes históricos. Pero ese resultado electoral solo fue posible porque el ilegítimo Temer y el partido judicial, acaudillado por el juez Moro, encarcelaron y proscribiendo escandalosamente al principal candidato, Lula, que encabezaba todas las encuestas. Su gobierno enfrenta el descrédito internacional, interminables tensiones internas y una situación económica crítica, que horada la base de apoyo que supo cosechar hace solo algunos meses.

Por eso la elección presidencial argentina, cuyas primarias abiertas simultáneas y obligatorias se realizaron el pasado 11 de agosto, era clave. Trump jugó en favor de la reelección de Macri en forma abierta y descarada, contra todo uso y costumbre. A través del FMI, habilitó 57.000 millones de dólares para financiar una artificial estabilidad financiera para darle oxígeno a la Casa Rosada hasta octubre. En Estados Unidos, el poder ejecutivo, el Congreso, Wall Street, los principales *think tanks* y las corporaciones periodísticas apoyaron

explícitamente a Macri, como no se veía desde 1946, cuando Braden disparó toda su artillería para intentar evitar el triunfo de Perón. La Casa Blanca hasta convenció a Bolsonaro de que viajara en julio a Buenos Aires para inmiscuirse en la elección de la Argentina. Un papelón diplomático que traerá consecuencias. El secretario de Estado de Trump, Mike Pompeo, visitó la Argentina en julio de 2019, para ratificar este respaldo, con la excusa de una cumbre antiterrorista.

Sin embargo, en estas elecciones quedó demostrado que con el apoyo del establishment financiero y político internacional no alcanza. La palmada en la espalda de los jefes de las potencias occidentales y de los burócratas del Fondo son indigeribles para un pueblo indómito como el argentino. El caballito de batalla de Macri, “volvimos al mundo”, terminó siendo impotente frente al desplome económico y la catástrofe social. Casi un boomerang. Reforzó la correcta percepción de que Macri gobierna para el FMI, para los grandes bancos y los socios locales de las grandes corporaciones trasnacionales. Su última jugada fue apostar por los tratados de libre comercio, como el de alcanzado entre el Mercosur y la Unión Europea, desventajoso en todo sentido y ahora de improbable ratificación parlamentaria. En el país donde más se batalló para derrotar al ALCA, suponer que un acuerdo de este tipo podía rendirle frutos electorales muestra una vez más su miopía política.

Así como en 2015 el triunfo de Macri empoderó a las derechas regionales y puso en terapia intensiva a los organismos regionales como la UNASUR y la CELAC, su debacle electoral de ayer va a potenciar las posibilidades de una victoria en octubre de Evo Morales en Bolivia y del Frente Amplio en Uruguay. Los vientos políticos parecen estar cambiando nuevamente. Como dijo Álvaro García Linera en noviembre pasado, en el Foro Mundial del Pensamiento Crítico de CLACSO, “tenemos un neoliberalismo fallido de corto aliento y un mundo incierto. Se ha agotado el combustible neoliberal, este es un neoliberalismo zombie”.

Trump intenta reimponer la Doctrina Monroe para retener el control de su “patio trasero” en un contexto de declinación hegemónica

y ascenso de China. Macri venía siendo funcional a la histórica estrategia de Estados Unidos de fragmentar a los países de la región para dominarlos más fácilmente: divide y reinarás. El ahora derrotado presidente argentino apoyó la política de Washington de restaurar el poder de la decadente OEA. Anoche esa posición claudicante entró en crisis en Argentina.

El sorprendente resultado electoral en las elecciones argentinas abre una oportunidad histórica para recuperar la iniciativa regional de las fuerzas populares y democráticas: para lograr la libertad de Lula y el fin del autoritarismo en Brasil, para buscar una salida pacífica y negociada en Venezuela –pese al boicot de Trump–, para reclamar el fin del bloqueo a Cuba y para recuperar la UNASUR y la CELAC. Empezó otro capítulo en la histórica busca latinoamericana de construir la Patria Grande.

Reflexiones finales. Los dos caminos frente a Trump: subordinarse o enfrentarlo

Trump está concitando un amplísimo rechazo internacional, como ocurrió con Bush, o peor. El repudio que suscita el polémico presidente estadounidense es particularmente alto en Nuestra América. Se destaca México, pero también alcanza a la Argentina, a pesar del alineamiento del presidente Macri. Esto, como parece haber quedado demostrado en las recientes elecciones argentinas, puede implicar un problema para Estados Unidos. Quedó claro en la Cumbre del G20 realizada en Buenos Aires a fines del año pasado. No es lo mismo aparecer sonriente frente al carismático Obama –como hizo Macri durante la visita de marzo de 2016–, que frente al revulsivo Trump. El “fantasma” de Mar del Plata (2005) –pero también el recuerdo de las protestas que debieron enfrentar Nixon (1958) y Rockefeller (1969)– reapareció en las calles porteñas el 30 de noviembre.

La reunión del G20 en Buenos Aires fue el primer viaje de Trump a América Latina. Antes, tenía proyectado asistir a la VIII Cumbre de

las Américas, en Lima, el 13 y 14 de abril de 2018, pero la decisión de bombardear Siria, tras el supuesto uso de armas químicas en Duma, el 7 de abril, terminó cancelando a último momento su viaje, en la que fue la más deslucida reunión de mandatarios americanos desde que se realizó el primero de estos cónclaves hace 24 años. Según una encuesta de *Pew Research Center*, dada conocer en las vísperas de la reunión en Lima, el 82% de los latinoamericanos consideran a Trump arrogante, el 77% intolerante y el 66% peligroso. La opinión favorable sobre Estados Unidos cayó 19% desde la Cumbre de las Américas de 2015, la última a la que asistió Obama.

Nuestra América atraviesa una hora incierta, en el que se avizoran dos caminos. O se imponen los gobiernos derechistas, que están dispuestos a asumir un rol subordinado frente a la Casa Blanca, aún si quien la ocupa temporalmente sostiene un discurso xenófobo, anti-hispano y crítico de los acuerdos de libre comercio, o se construye una alternativa superadora, en oposición a la prepotencia injerencista y militarista que impulsa la principal potencia imperial. El dilema es crucial para las fuerzas de izquierda, populares y progresistas de Nuestra América. Ante la ofensiva imperialista es crucial y urgente construir una alternativa superadora, que vaya más allá de la mera posición defensiva frente al avance del capital trasnacional más concentrado.

A gobiernos derechistas, como los de Macri, Bolsonaro, Piñera o Duque, impulsores de los tratados de libre comercio y de la apertura económica indiscriminada, alinearse con el impopular Trump les hace pagar un costo político interno alto. Las recientes elecciones primarias en Argentina parecen ser una muestra que ratifica este diagnóstico. Nuestra América debe avanzar con una agenda propia, descartar las estrategias aperturistas y subordinadas a Estados Unidos. El fracaso de las socialdemocracias europeas y del Partido Demócrata en el país del norte, que a pesar de su prédica progresista implementaron el ajuste neoliberal, tiene que ser una lección para las fuerzas populares y de izquierda. O se avanza con una crítica

radical y se construyen alternativas, o la impugnación a la globalización neoliberal será aprovechada por los líderes neofascistas.

El fracaso de la estrategia de Macri de dar la espalda a la región para congraciarse con Trump muestra la necesidad de converger con los demás países latinoamericanos para negociar con las potencias extra regionales desde una posición de mayor fortaleza. Negociando individualmente con una gran potencia, Argentina –o cualquier país de la región– tiene las mayores chances de perder. En cambio, hay ejemplos históricos de negociaciones exitosas cuando se alentó la convergencia con otros países similares. En la reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) realizada en Cancún, en 2013, convergieron los países exportadores de bienes primarios y se pusieron de acuerdo para paralizar las negociaciones en tanto no se discutieran los subsidios agrícolas de Estados Unidos, Europa y Japón. La liberalización del comercio no puede abarcar solamente a la industria y los servicios. Algo similar ocurrió dos años después, cuando los países del Mercosur, más Venezuela, impidieron que avanzara el proyecto del ALCA.

En síntesis, Trump es un gran peligro –sus iniciativas misóginas, xenóforas, anti-obreras, plutocráticas, militaristas, injerencistas y contra cualquier protección del medio ambiente son una señal de alarma para el mundo entero– pero a la vez una oportunidad, por el rechazo que genera, para retomar la integración latinoamericana con una perspectiva antiimperialista y anticapitalista, y al mismo tiempo ampliar la coordinación y cooperación políticas, confluyendo con las organizaciones populares que lo enfrentan en Estados Unidos. Con Trump, a la clase dominante estadounidense, y a sus gobiernos aliados en la región, se les complica desplegar el *imperialismo moral*. Con el actual ocupante de la Casa Blanca, les cuesta mostrar a Estados Unidos como el líder de los organismos multilaterales, que cuida las democracias, el planeta y los *valores occidentales*, respetando las normas de la diplomacia internacional. Como declaró Julián Assange, el líder de *Wikileaks*, si Obama era “un lobo con piel de cordero”, Trump es un “lobo con piel de lobo” (*Página/12*, 5 de febrero

de 2017). Expresa descarnadamente el afán de dominio imperial sobre Nuestra América. Esta fue convalidada por el entonces secretario de Estado Tillerson, en el discurso en Texas, el 1° de febrero, y en su ulterior gira latinoamericana. Y eso puede incrementar aún más el rechazo a la subordinación claudicante que proponen las derechas regionales como único camino posible. Ante los dos caminos posibles, aceptar el dominio colonial, subordinándose a Estados Unidos, o avanzar en la postergada confluencia de Nuestra América, solo el segundo permitirá una inserción internacional más autónoma, condición necesaria para avanzar en la construcción de un orden social menos desigual y depredatorio.

Más que ocuparnos en qué está mirando el Tío Sam, entonces, tendríamos que preguntarnos qué necesita y quiere Nuestra América, y luego sí plantear, en forma coordinada y conjunta en toda la región, una relación no subordinada con Estados Unidos.